

San Miguel, siete de enero de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos antecedentes RUC 2140313709-7, RIT O-7-2021, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, por sentencia definitiva de dieciséis de diciembre del año en curso, se acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo interpuesta por don Mario Guillermo Lorca Pisamante en contra de Empresas Carozzi S.A. y de Randstad Servicios Transitorios Limitada, que resultaron condenadas al pago de la suma de \$6.000.000 por concepto de daño moral, y \$7.000.000 por lucro cesante.

Contra el aludido fallo, la abogada doña Nidy Moscoso Allel, en representación de la demandada Randstad Empresa de Servicios Transitorios Limitada, interpuso recurso de nulidad invocando como causal la de la letra e) del artículo 478 Código del Trabajo. A su vez, la abogada doña Camila Melgarejo Espina, en representación de la demandada Carozzi S.A. recurrió de nulidad invocando como causal principal la de la letra b) del artículo anteriormente citado, y de manera subsidiaria la del artículo 477 en relación a los artículos 177, 453 y 454 del Código del Trabajo, y 1556 del Código Civil.

Por resolución de dieciséis de diciembre pasado, se declararon admisibles los recursos, y en la audiencia de treinta y uno del mismo mes intervinieron, por el recurrente Randstad Empresa de Servicios Transitorios Limitada, la abogada doña Nidy Moscoso Allel, por la recurrente Empresas Carozzi S.A., el abogado don José Castro Fuentes, y por el recurrido, la abogada doña Yasna Maldonado Navarro.

Con lo oído y considerando:

Primero: Que, previo al análisis del libelo de impugnación de ambos recurrentes, cabe tener presente que el recurso de nulidad introducido en el Código del Trabajo tiene el carácter de un recurso de derecho estricto, que tiene por objeto, según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de las disposiciones en que se consagran las causales que lo hacen procedente -los artículos 477 y 478 del referido Código-. Esta vía impugnativa de resoluciones judiciales tiene, además, un carácter extraordinario, que se evidencia por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las referidas causales, lo que determina un ámbito restringido de revisión por parte de los Tribunales de Alzada, por lo que no corresponde ante su interposición realizar una revisión total del conflicto ni de la decisión impugnada, sino que sólo del asunto, que de acuerdo a los postulados del recurrente, constituye el agravio específico materia de la impugnación. Se trata, en definitiva, de un recurso cuyo fin es obtener la invalidación total o parcial del procedimiento, junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, pronunciada por un Tribunal Laboral. Además, el recurso debe interponerse por escrito y se tiene que señalar el vicio o los vicios que se reclaman, la infracción de garantías constitucionales o de ley en que se haya incurrido y la forma como las mismas influyeron en lo dispositivo de la



DKMFLPXMP

sentencia, y contener fundamentos de hecho y de derecho, peticiones concretas y en el evento que se funde en más de una causal, deberá señalarse si ellas se invocan conjunta o separadamente.

Segundo: Que como ya se adelantó, el primer recurrente, la demandada principal “Randstad Empresa de Servicios Transitorios Limitada”, para sustentar la causal invocada, hace presente que el trabajador demandó a Randstad Empresa de Servicios Transitorios Limitada, en circunstancias que su empleador era Randstad Chile S.A. A raíz de ello, indica que el juez, en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, decimo y décimo cuarto de la sentencia, al pronunciarse sobre la demanda objeto de autos, y fijar los hechos controvertidos del juicio se refiere en todo momento a que la relación laboral se produce entre Randstad Chile S.A. y don Mario Lorca Pismante, y no con la empresa Randstad Empresa de Servicios Transitorios Limitada. Sin embargo, termina por condenar a Randstad Empresa de Servicios Transitorios Limitada.

Alega que el sentenciador no puede sostener que la relación laboral, los hechos y las circunstancias que rodearon el accidente, el procedimiento de trabajo seguro, el otorgamiento de Reglamento Interno y la responsabilidad que tiene Randstad Chile S.A. con Empresas Carozzi S.A. es netamente responsabilidad de la empresa contratista, es decir, Randstad Chile S.A. y luego condenar a Randstad Empresa de Servicios Transitorio Limitada.

Sostiene, en definitiva, que el fallo contiene decisiones y consideraciones contradictorias, toda vez que condena a su representada, a quien no le cabe responsabilidad alguna en el juicio.

Solicita que se acoja el recurso en todas sus partes, rechazando la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el trabajador, con costas.

Tercero: Que, según consta de los autos, el actor Mario Guillermo Lorca Pismante, operador de grúa horquilla, interpuso demanda de indemnización de perjuicios, por accidente del trabajo, contra la Empresa Randstad Empresa de Servicios Transitorios Limitada, con la cual celebró un contrato de suministro de personal vigente, para desempeñarse como operador de grúa horquilla en el establecimiento de Empresa Carozzi s.a., para desempeñar sus labores en la planta de Avenida Diego Portales 5201 de la comuna de San Bernardo, con una remuneración de \$638.002.-, por lo que la demanda la interpone contra la Empresa Carozzi S.A., representada por don Sebastián García Tagle, y contra Randstad Servicios Transitorios Limitada, representada por don Rodolfo Vignati Rodríguez. Ambas Empresas demandadas, contestaron en tiempo y forma la demanda.

La sentencia de primer grado, en su parte resolutive, resuelve: “Que se acoge la demanda interpuesta por don Mario Guillermo Lorca Pismante, en contra de la Empresa Carozzi S.A., representada por don Sebastián García Tagle y a Randstad Servicios Transitorios Limitada, representada por don Rodolfo Vignati Rodríguez, condenándose ambas al pago conjunto de una



indemnización por daño moral ascendente a la suma de \$6.000.000 (seis millones de pesos), y a la indemnización por lucro cesante, por la suma de \$ 7.000.000 (siete millones de pesos) “ (sic).

En consecuencia, para que existan decisiones contradictorias, que en el caso en examen no las hay, el vicio debe estar en la sentencia que se recurre la que debe contener más de una decisión y que en esa pluralidad de lo resuelto de una parte sea en la práctica imposible de cumplir porque a ello se opone lo ordenado en otra.

Es decir, habrá decisiones contradictorias en la medida que existan dos dictámenes o deliberaciones que recíprocamente se destruyan -por haber una antinomia-.

En el caso planteado en el recurso- decisiones contradictorias- lo decidido por el Tribunal del fondo fue acoger la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en concordancia con lo solicitado en la demanda. No hay, por lo tanto, ninguna decisión contradictoria con lo resuelto, y luego no existe el vicio denunciado.

Más aún, decisiones contradictorias requiere que el fallo del tribunal del fondo contenga más de una decisión, y que ellas resulten incompatibles, esto es, que no puedan cumplirse simultáneamente en tanto interfieren unas con otras, y resulta que en el presente caso el fallo atacado sólo contiene una decisión, consistente en acoger la demanda deducida por don Mario Guillermo Lorca Pismante.

Adicionalmente, también, cabe referirse al hecho de que en el motivo décimo del fallo impugnado se señala que conforme al mérito de la prueba rendida en el juicio no resulta un hecho controvertido que Randstad Chile S.A., es la empresa de servicios transitorios y Carozzi S.A., es la empresa usuaria. Al respecto cabe consignar que las dos empresas demandadas, contestaron la demanda, y que incluso la empresa Randstad Chile S.A., incorporó prueba documentada al juicio, sin que se haya alegado tratarse de una empresa que no estaba demandada, razones que tuvo presente el a quo para condenar a la empresa principal y a la que prestaba servicios transitorios.

Cuarto. Que, en consecuencia, planteado de este modo el recurso, y en tanto lo alegado es que el fallo impugnado contiene decisiones contradictorias, y que la relación laboral entre el demandante lo es con Randstad Chile S.A., pero no con Randstad Empresa de Servicios Transitorios Limitada, cuestiones ya analizadas, el presente medio de impugnación debe ser desestimado.

Quinto: Que, a su vez, el recurrente Carozzi S.A., esgrime la causal del artículo 478 letra b) manifestando que el vicio que se denuncia se desprende de la sola lectura del fallo. Indica que la declaración de responsabilidad de su representada y la condena por lucro cesante tienen por supuesto el incumplimiento del deber de protección de las demandadas, conclusión a la que se arriba con infracción a las reglas de la valoración de la prueba.

Señala que su representada incorporó al proceso prueba documental consistente en la investigación de accidentes elaborado por Randstad, investigación de accidentes Comité Paritario elaborado por Randstad, entrega de elementos de protección, registro de recepción de reglamento interno, entre otros, y prueba testimonial que daba cuenta que el trabajador había sido capacitado en la manera en que debía desempeñar sus funciones y los riesgos que esta entrañaban. Sin embargo, el razonamiento del sentenciador hizo caso omiso a los documentos y declaraciones.

La sentencia impugnada determina que, al tratarse de un accidente del trabajo la prueba de la diligencia debe soportarla quien debe emplearla, no obstante, una cosa es determinar quién tiene la carga de la prueba, y otra distinta es establecer más allá de los límites legales cuales son los medios de prueba idóneos para acreditar la diligencia debida. Esgrime que la sentencia recurrida hace caso omiso a las declaraciones prestadas en juicio señalando expresamente que se trataría de prueba “no incorporada al juicio” por cuanto los dichos vertidos por los testigos, en orden a que los trabajadores pasan por un proceso de inducción y una capacitación técnica de 5 días, no constaban en antecedentes escritos.

Señala que el razonamiento del tribunal constituye una infracción a las normas de la sana crítica, a las reglas de la lógica y específicamente al principio de razón suficiente. Expresa que es posible entregar un protocolo de trabajo seguro, pero ello no puede ser el único medio para acreditar el cumplimiento de la diligencia debida. Indica que de la prueba rendida queda claro que los empleados que trabajan con grúas horquilla deben pasar por capacitaciones. Reclama que el tribunal no da argumentos basados en una causa suficiente para descartar a los testigos, simplemente se limita a indicar que el medio probatorio idóneo era la prueba documental, lo que implicaría establecer en la práctica un sistema de prueba judicial tasada, que contraviene el sistema de valoración de la sana crítica. Expone que el juez también reprocha que en los documentos presentados no existe la cantidad de pallets máxima a cargar, estableciendo el juez una exigencia desmedida y sin fundamento.

Por otro lado, alega que el sentenciador transgrede las máximas de la experiencia desde que subestima al demandante al establecer que el trabajador no puede contar por sí mismo la cantidad de pallets antes de transportarlos, lo que implica desconocer la autonomía de los trabajadores y nuestro acervo cultural.

En cuanto a la configuración del lucro cesante y su prueba, esgrime que el tribunal se desvía del concepto de indemnización, y que en un ejercicio meramente aritmético el tribunal plantea que la remuneración que habría obtenido el trabajador, de seguir prestando servicios para la demandada principal había que multiplicarlo por 1 para así obtener el total anual y luego aplicar el 20%. Reclama que la sentencia no se ocupa de establecer la existencia del daño, y que el propio tribunal expresa tener conocimiento de que el demandante tiene actualmente otro

trabajo. Además, da por sentado que el demandante necesariamente habría seguido prestando servicios con la misma remuneración para el mismo empleador. Concluye que la sentencia contraviene las reglas de la lógica, específicamente la de no contradicción ya que, o bien el trabajador se ha visto privado de ejercer una actividad remunerada y en consecuencia de obtener la contraprestación, o bien, la ejerce y tiene acceso a ella.

Añade que el sentenciador, al dilucidar sobre la concurrencia o no de la exposición impudente al daño incurre en una argumentación falaz, toda vez que el hecho de que el trabajador supuestamente no haya recibido la capacitación pertinente no implica que éste no haya podido tener conocimiento del riesgo de la maniobra que realizaba.

Solicita que se anule la sentencia y se dicte otra de reemplazo que señale que su representada no es responsable del accidente y que por tanto no está obligada al pago de indemnización por daño moral ni por lucro cesante. En subsidio, pide que se reduzcan los montos a los que su representada fue condenada.

Sexto: Que, respecto a la causal que se denuncia, cabe señalar que el artículo 456 del Código del Trabajo, señala lo siguiente: “El Tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica“. Al hacerlo, el Tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador “.

Séptimo: Que examinando el fallo recurrido se constata que éste valora la prueba sin apartarse de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicamente afianzados. Basta la lectura de los motivos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo para poder concluir lo señalado, desde el momento que el tribunal del fondo acude a la prueba rendida para indagar los motivos del accidente del trabajo y si en él se tomaron todas las medidas de seguridad que ordena la ley.

Al respecto, en el motivo cuarto se analiza si existió relación laboral entre las partes del juicio, en el quinto se analiza los hechos y circunstancias que rodearon el accidente que sufrió el actor, su diagnóstico y la extensión del mismo, en el sexto se examina si la empresa Randstad Chile S.A., entregó al actor el procedimiento de trabajo seguro, y en el séptimo se concluye que el actor recibió el reglamento interno de la empresa, el manual de seguridad laboral y el documento relativo al artículo 21 del Decreto Supremo 40, y que la demandada Randstad Chile S.A., incorporó en el folio 47 un instructivo de carga y descarga de pallets el cual no se encuentra firmado por el actor, ni existe en autos algún documento que dé cuenta de un procedimiento de trabajo seguro, y en la reflexión octava el Tribunal dice que ponderada la prueba de autos conforme a las reglas de



la sana crítica el Tribunal concluye que la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad y proporcionar todos los elementos necesarios para prevenir cualquier tipo de accidentes mientras el trabajador presta servicios personales, corresponde al empleador y que si el empleador no prueba que ha cumplido esta obligación, se presume la culpa, por tratarse de una responsabilidad contractual, para luego en el motivo noveno analizar el contrato de trabajo de servicios transitorios y, finalmente en el motivo décimo referirse a las conclusiones y luego al daño moral.

Octavo: Que sobre la causal de nulidad en estudio, vale recalcar que el recurso apoyado en ella requiere un esfuerzo por parte de la recurrente dirigido a explicar cómo en el caso concreto se afectó o vulneró alguno de los principios que informan la lógica o en qué sentido se contradijo las máximas de las experiencias, sin perjuicio de que en el evento que existiere una infracción a las reglas de la sana crítica, tampoco se cumple el supuesto que ésta sea manifiesta, como exige la causal de nulidad invocada, esto es, que surja en forma evidente de la sola lectura del fallo.

Noveno: Que, en definitiva, corresponde a la parte recurrente mencionar cuales son los principios de la sana crítica que se han vulnerados al apreciar la prueba, si los razonamientos jurídicos, los de la lógica, los de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, pues cada uno de ellos tiene un contenido diferente. En este caso se denuncia infringido “los de la lógica”, caso éste en el que se debe indicarse, a su vez, los principios que el razonamiento judicial se ha visto conculcado, sea el de identidad, el de razón suficiente o el del tercero excluido, sosteniéndose en el recurso que lo vulnerado es la máxima de la experiencia.

Pero, sin embargo, de una atenta lectura de la sentencia recurrida es posible verificar que el Tribunal del fondo analizó todo el material probatorio aportado por las partes, y las conclusiones que obtiene se contienen en el fallo, siendo reproducible el razonamiento y la forma como alcanza las conclusiones a que llega. Por consiguiente, esta Corte no detecta saltos lógicos en el razonamiento del Tribunal recurrido, a lo que puede agregarse que el tribunal recurrido tiene plena facultad legal para estimar o preferir o dar mayor validez a una prueba sobre otra, considerando cada una de las pruebas analizadas, sin que aparezca de la lectura de la sentencia que se hubieran infringidos las normas de ponderación de la prueba, lo que tiene importancia desde el recurrente reclama en su recurso que no se valoró toda la prueba o se le dio mayor valor a la de la parte contraria, y es lo cierto que el Tribunal analizó todo el material probatorio, incluida la rendida por el recurrente. Lo que, al parecer, se pretende es una valoración de la prueba conforme a la teoría del caso del reclamante, lo que no es posible.

Por todo lo precedentemente expuesto, el recurso que se analiza será desechado.



Décimo: Que, en cuanto a la causal subsidiaria, que invoca la demandada Carozzi S.A., la recurrente indica que la sentencia infringe los artículo 177, 453 y 454 del Código del trabajo así como también el artículo 1556 del Código Civil. Indica que de la prueba aportada en autos, incluida la declaración del hijo del actor, consta de manera clara que actualmente el demandante se encuentra prestando servicios. En ese sentido, aun cuando perciba un monto remuneracional menor al que percibía en la empresa, el tribunal realiza el mismo análisis que se realiza si el trabajador no prestara servicios, lo cual claramente importa una errónea interpretación y aplicación del artículo 1556 del Código Civil, toda vez que determina de manera absolutamente arbitraria la pérdida de ganancia del trabajador, sin siquiera explicar cuantitativamente cómo consideró los montos actuales que percibe el trabajador y que son fácilmente proyectables hasta los 65 años, y las otras circunstancias relevantes.

Expone que la prospección que mandata al juez el artículo 1556 CC sin duda debe partir de los antecedentes fácticos actuales, los cuales se proyectan hacia el futuro. En ese derrotero, el juez aplica erróneamente el artículo 1556 al sobredimensionar arbitrariamente la expectativa de ganancia del trabajador, achacando ese exceso a su representada de manera injustificada. El tribunal acoge la acción y condenó al pago de la indemnización por lucro cesante, aun cuando constaba en el proceso que el actor se encuentra prestando servicios en otra empresa, percibiendo su correspondiente remuneración.

Señala que, de haberse aplicado correctamente la ley, se habría determinado que no era procedente la condena. Añade que el tribunal expresa las operaciones efectuadas para llegar a la suma de \$10.000.000, pero luego no explica cómo influyen los factores que esa suma disminuya a \$7.000.000, en circunstancias que dicha indemnización no corresponde o -de hacerlo- correspondía a una suma considerablemente menor.

Solicita que se anule la sentencia y conforme al mérito de las probanzas rendidas en el juicio, se dicte la sentencia de reemplazo que corrija los montos de las prestaciones demandadas (indemnizaciones) conforme a la normativa legal.

Undécimo: Que, del mérito de los antecedentes que se conocen se concluye que el tribunal del fondo fue acucioso para examinar las normas que debían ser aplicadas al caso de autos.

En efecto, analizó en detalle los hechos y circunstancias que rodearon el accidente del trabajador demandante, su diagnóstico y la extensión del mismo, como se observa en el considerando quinto, en seguida, todo el procedimiento acerca del trabajo seguro -motivos sexto y séptimo-, y las medidas a que se refiere el artículo 184 del Código del Trabajo, para concluir en el motivo octavo que no se adoptaron todos los resguardos que establece el legislador, y citar, en la reflexión novena, lo referente al contrato transitorio del artículo 183-R del Código del Trabajo y las normas de la ley 16.744 y su reglamento, todo lo cual se plasma en lo resolutivo del fallo.



Que, de esta manera, la Corte llega a la convicción que no existe infracción de ley de las que se denuncian como vulneradas, toda vez que lo resuelto por el Tribunal recurrido está dentro del ámbito de sus competencias, sin que se observe que se haya configurado la causal de invalidación de la sentencia contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, y por el contrario, se constata un estricto apego a las normas que se denuncian como vulneradas, por lo que el recurso de nulidad que se analiza deberá rechazarse.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477, 478 y 481 del Código del Trabajo, **se rechazan**, sin costas, los recursos de nulidad deducidos por la abogada Nidy Andrea Moscoso Allel, en representación de la demandada principal Randstad de Servicios Transitortios Limitada, y por la abogada Catalina Melgarejo Espina, en representación de la empresa demandada Empresas Carozzi S.A., en contra de la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, la que, en consecuencia, **no es nula**.

Regístrese y devuélvase vía interconexión.

Redacción del Ministro Sr. Luis Sepúlveda Coronado.

N° 607-2021-Lab-Cob.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Itma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sr. Diego Simpertigue Limare, Sr. Luis Sepúlveda Coronado y Abogado Integrante Sr. Francisco Ferrada Culaciati.



Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Diego Gonzalo Simpertigue L., Luis Daniel Sepúlveda C. y Abogado Integrante Francisco Ferrada C. San miguel, siete de enero de dos mil veintidós.

En San miguel, a siete de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

